



**Fiscalía General del Estado
de Baja California**

DEPENDENCIA

**SECCIÓN FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA**

NO. OFICIO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1133

EXPEDIENTE

FOLIO: 021381024000435

ASUNTO: Respuesta a solicitud de acceso a la información.
Mexicali, B.C., a 08 de agosto de 2024.

**C. CRISTIAN TORREZ CRUZ
P R E S E N T E.-**

Anteponiendo un cordial saludo por medio del presente me permito manifestar a Usted, que la solicitud de acceso a la información pública, registrada con el número de folio: **021381024000442**, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en vía de cumplimiento, se le remite la siguiente información:

Derivado de las funciones del Ministerio Público, Policías y Peritos emanadas de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de su aplicación en todo el territorio mexicano. La Fiscalía/Procuraduría, en relación a la Localización Geográfica o Geolocalización a la que se refiere la ley:

¿Cuál es el fundamento jurídico para realizar geolocalizaciones o Localizaciones Geográficas de teléfonos?

Respuesta: Lo dispuesto en el Título V, Capítulo II, artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de los Actos de Investigación.

¿Se necesita siempre autorización judicial para llevarlo a cabo?, en caso de no necesitarse, ¿por qué? Favor de fundamentar legalmente

Respuesta: Si, siempre se requiere de autorización emitida por el Juez de Control de Fuero Correspondiente.

¿Cuál es el fundamento legal para adquirir, rentar o celebrar contratos en materia de geolocalizaciones? ¿Y cuál es su objetivo?

Respuesta:

Fundamento Legal: La adquisición y contratación de todo tipo de bienes y servicios para la Fiscalía (incluyendo las geolocalizaciones), se llevan a cabo con fundamento en las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como en apego a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de este Organismo Autónomo y su Reglamento, en específico en el artículo 147, en relación con el 170 de este último.

Objetivo: Su objetivo es servir como apoyo a las investigaciones de hechos delictivos.

¿Cuál es la justificación para la adquisición de tecnologías de geolocalización y para la autorización de la adquisición?

Respuesta:

Justificación para la adquisición: Servir como apoyo a las investigaciones de hechos delictivos.

Autorización de la adquisición: por lo que en contestación a lo solicitado se hace de conocimiento que la autorización, adquisición y contratación de todo tipo de bienes y servicios para la Fiscalía (incluyendo las geolocalizaciones), se llevan a cabo con fundamento en las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como un apego a las atribuciones establecidas en la ley Orgánica de Este Organismo Autónomo y su Reglamento, en específico en el artículo 147, en relación con el 170 de este último.



Fiscalía General del Estado de Baja California

DEPENDENCIA

SECCIÓN

NO. OFICIO

EXPEDIENTE

¿Quién lleva a cabo las geolocalizaciones o localizaciones geográficas y quién las ordena?

Respuesta: Los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, por requerimiento del juez de control del fuero correspondiente.

¿Cuál es el fundamento para realizar geolocalizaciones o para utilizar software o programas o equipos de geolocalización?

Respuesta: Lo dispuesto en el Título Octavo en su Capítulo Único respecto de las Obligaciones en Materia de Seguridad y Justicia, en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con el Título V, Capítulo II, respecto de los Actos de Investigación, en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Derivado de sus respuestas, la Fiscalía/Procuraduría, a través de su personal (MP, Policías o Peritos) podrá ordenar ejecutar o ejecuta Localizaciones geográficas o geolocalizaciones de personas o equipos telefónicos? De ser así cual es el marco jurídico para usarlos.

Respuesta: El agente del Ministerio Público realiza la solicitud al juzgado Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos, e Intervenciones de Comunicaciones, quien vez que lo autoriza hace el requerimiento directamente a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, quienes son los que efectúan dicha diligencia.

¿Quién efectúa o ejecuta dichas Localizaciones geográficas o geolocalizaciones? (MP, Policías o Peritos)

Respuesta: El agente del Ministerio Público realiza la solicitud al juzgado Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos, e Intervenciones de Comunicaciones, quien vez que lo autoriza hace el requerimiento directamente a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, quienes son los que efectúan dicha diligencia.

Asimismo, tomando en consideración que para cumplir con los objetivos de transparencia, los contratos son Públicos ¿tienen contratos de compra-venta, renta o cualquier otro en el que se haga uso o permita utilizar equipos o softwares para localización geográfica o geolocalización?, favor de remitir del año 2020 a la fecha los que se hayan celebrado, en versión pública

Respuesta: Me permito informar que, como es de conocimiento público mediante decreto No. 07 emitido por la XXIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California y Publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 23 de Octubre de 2019, fueron reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para crear la Fiscalía General del Estado de Baja California, mediante la fusión de la antigua procuraduría General de Justicia y la entonces denominada Secretaria de Seguridad Pública respectivamente; en el mismo sentido, en fecha del 31 de octubre de 2019 fue publicado en el periódico oficial del Estado, el decreto No. 10 de la XXIII Legislatura del Estado, mediante el cual se expidió la Ley Organica de la Fiscalia General, y cuyo Artículo Septimo Transitorio establece que **se contara con el plazo maximo de unaño, contados a partir del 31 de Octubre de 2019, para implementar en su totalidad la transición administrativa de la procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaria de**



Fiscalía General del Estado de Baja California

DEPENDENCIA

SECCIÓN

NO. OFICIO

EXPEDIENTE

Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, tiempo durante el cual todos los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, y cualquier tipo de información derivada de dichos procedimientos en donde el área usuaria o requirente fueron las dependencias antes mencionadas, se desarrollaron y tramitaron a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, hasta en tanto se concluía con la Transición antes referida, esto es, hasta el día 31 de octubre de 2020, por lo que se adjunta acuerdo de Incompetencia FGE/DLA/005/2024, suscrito por el Lic. Bernardo Moreno Martínez, Director de Licitaciones y Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, así como Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024, mediante el cual se aprueba incompetencia con número de acuerdo SO-3-2024-02

En contexto y en relación la pregunta correspondiente, toda vez que se han celebrado diversos contratos administrativos de presentación de Servicio de Consultas de Geolocalización, solicitados por diversas Unidades de esta Fiscalía General, Los cuales se encuentran enlistados en el contenido de Acuerdo de clasificación como reservada, por lo que se adjunta acuerdo de Reserva FGE/DLA/004/2024, suscrito por el Lic. Bernardo Moreno Martínez, Director de Licitaciones y Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, así como Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2024, mediante el cual se aprueba incompetencia con número de acuerdo SO-3-2024-01

Favor de remitir un número del total de las veces que se han ejecutado localizaciones geográficas o geolocalizaciones derivado de esos contratos

Respuesta: 0 (cero) veces se han ejecutado localizaciones geográficas o geolocalizaciones derivado de contratos.

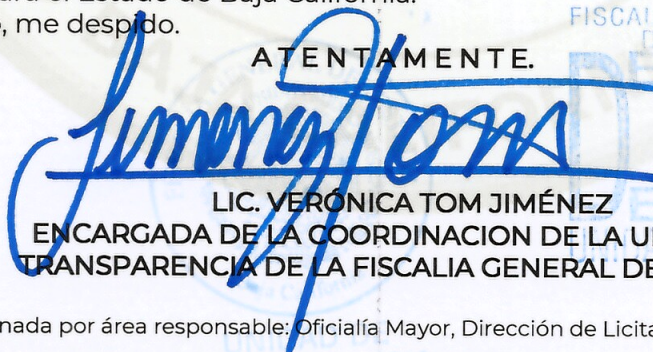
Aplicando para el caso en particular, el criterio de interpretación en materia de acceso a la información pública 014/2023 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, que a la letra establece lo siguiente:

"ejercicio del derecho de Acceso a la Información. Respuesta igual a cero, no es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, este deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo"

Lo anterior, con fundamento en los artículos 55, 56 fracciones II, IV y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE.


LIC. VERÓNICA TOM JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
RESPACHADO
23 AGO 2024
TRANSPARENCIA

Fuente: Información proporcionada por área responsable: Oficialía Mayor, Dirección de Licitaciones y Adquisiciones, Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado.



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

ACUERDO: FGE/DLA/004/2024

ACUERDO

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR EL QUE SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA CONCERNIENTE A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE FOLIO 021381024000442.

GLOSARIO

Comité de Transparencia:	Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Fiscalía General:	Fiscalía General del Estado de Baja California.
Ley de Transparencia:	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Ley General:	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lineamientos Generales:	Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Reglamento de la Ley:	Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Ley Orgánica de la Fiscalía General	Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

ANTECEDENTES

1. Presentación de escrito. En fecha 29 de julio de 2024, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de información que quedó registrada con el número de folio **021381024000442**, que a la letra dice:



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

"Derivado de las funciones del Ministerio Público, Policías y Peritos emanadas de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de su aplicación en todo el territorio mexicano.

La Fiscalía /Procuraduría, en relación a la Localización Geográfica o Geolocalización a la que se refiere la Ley:

¿Cual es el fundamento jurídico para realizar geolocalizaciones o Localizaciones Geográficas de telefonos?

¿Se necesita siempre autorización judicial para llevarlo a cabo?, en caso de no necesitarse, ¿por que? Favor de fundamentar legalmente

¿Cuál es el fundamento legal para adquirir, rentar o celebrar contratos en materia de geolocalizaciones? ¿Y cual es su objetivo?

¿Cual es la justificación para la adquisición de tecnologías de geolocalización y para la autorización de la adquisición?

¿Quién lleva a cabo las geolocalizaciones o localizaciones geográficas y quien las ordena? ¿Cual es el fundamento para realizar geolocalizaciones o para utilizar software o programas o equipos de geolocalización?

Derivado de sus respuestas, la Fiscalía/Procuraduría a través de su personal (MP, Policías o Peritos) podría ordenar ejecutar o ejecuta Localizaciones geográficas o geolocalizaciones de personas o equipos telefónicos? De ser así cual es el marco jurídico para usarlos.

¿Quién efectúa o ejecuta dichas Localizaciones geográficas o geolocalizaciones? (MP, Policías o Peritos)

Así mismo, tomando en consideración que para cumplir con los objetivos de transparencia, los contratos son Públicos ¿tienen contratos de compra-venta, renta o cualquier otro en el que se haga uso o permita utilizar equipos o softwares para localización geográfica o geolocalización?, favor de remitir del año 2020 a la fecha los que se hayan celebrado, en versión pública.

Favor de remitir un número total de las veces que se han ejecutado localizaciones geográficas o geolocalizaciones derivado de esos contratos." (sic)

2. Turno a la Unidad Administrativa. Se recibió en esta Dirección de Licitaciones y Adquisiciones la boleta numero OM/TR/112/2024, signada por el Mtro. Ricardo Daniel Garduño Barrera, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con la cual se turna la Solicitud de Acceso a la Información Pública **021381024000442**.

3. Ampliación de Plazo. El día 08 de agosto del presente año, mediante oficio 1138, signado por la Lic. Verónica Tom Jiménez, Encargada de la Coordinación de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, se solicitó la intervención del Comité de Transparencia para someter a su consideración la ampliación de plazo para dar



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

respuesta a la solicitud de información registrada de referencia. Dicha ampliación fue aprobada en esa misma fecha por hasta 10 (diez) días adicionales, es decir, hasta el día 26 de agosto de 2024.

Con base en lo anterior, y

CONSIDERANDO

I. Competencia. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 53 y 54, fracción II de la Ley de Transparencia, es atribución del Comité de Transparencia confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen las Unidades Administrativas que integran la Fiscalía General.

II. Marco normativo. Que el artículo 7, apartado C, de la Constitución Local, establece que el derecho humano de acceso a la información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Así mismo en la fracción I del mismo apartado, indica que, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, **es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones de interés público en los términos que fije la Ley.**

II.1 Que el artículo 2 de la Ley de Transparencia señala que, el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

términos y condiciones que establece la Constitución Federal, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General y la Ley de Transparencia.

En ese sentido, los diversos 53 y 54, fracción II de la Ley de Transparencia, prevén que el Comité de Transparencia es un órgano colegiado que ejerce atribuciones, entre otras, para **confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.**

Que el artículo 106 de la Ley de Transparencia prevé que, la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. En el proceso de clasificación de la información, **los sujetos obligados observarán lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley General**, así como los Lineamientos Generales que para tal efecto emita el Sistema Nacional de Transparencia.

Así, el diverso 107 del mismo ordenamiento jurídico establece que las y los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información.

II.2 Que el artículo 110 fracciones I, VI y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, **considera información reservada**, entre otras, aquella que comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, obstruya la prevención o persecución de los delitos y, se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

II.3 Que el artículo 111 de la Ley de la misma, establece que las causales de la reserva de la información deberán fundarse y motivarse a través de la aplicación de una prueba de daño.

Que la prueba de daño de acuerdo con la fracción XXII del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, es obligación de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de la información lesiona el bien jurídico tutelado, y que el daño



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

que puede producirse con la publicidad de ésta es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente debe clasificarse como reservada, robustece lo anterior la Tesis Aislada, con número de registro digital 2018460, que a continuación se transcribe:

“PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. ***Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*** Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.”

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 149/2018. Amanda Ibáñez Molina. 6 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Roberto César Morales Corona.

Énfasis añadido

II.4 Que, al aplicar la prueba de daño conforme a lo señalado por el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California se debe justificar que:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

II.5. Qué con base en las disposiciones jurídicas invocadas, en concordancia con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas particularmente el Trigésimo Tercero, se determina que, en la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, atendiendo lo siguiente:

- I.** Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;
- II.** Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;
- III.** Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;
- IV.** Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
- V.** En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y
- VI.** Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

III. Aplicación de la Prueba de Daño. Que, en consecuencia, al aplicar la prueba de daño se justifica clasificar como reservada la información solicitada a través del número de folio 021381024000442, consistente en datos contenidos los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultas de Geolocalización derivado de diversos procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, como a continuación se demuestra.

III.1 Observancia al artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

A. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública.

En este sentido atendiendo a la información solicitada, es preciso señalar que la información requerida corresponde a Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultas de Geolocalización derivado de diversos procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública. Lo anterior por contener información de naturaleza reservada, la cual hace evidente un riesgo real, demostrable e identificable, con relación al interés público, como a continuación se demuestra.

Riesgo real. Revelar la información referente a los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultas de Geolocalización derivado de diversos procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública que obran en los archivos de esta Fiscalía General, representa un menoscabo para la seguridad de esta Institución, toda vez dichos contratos contienen información sensible utilizada para la prevención y persecución de delitos por lo que resulta necesario reservar la información referente a las especificaciones del Sistema de Geolocalizaciones, sin omitir señalar, que la reserva de la información, se encuentra expresamente prevista en diversas disposiciones normativas con tal carácter, siendo estas previsiones de orden público y de observancia general.

Riesgo demostrable. De ser revelada la información contenida en los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultas de Geolocalización derivado de diversos procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

Pública que obran en los archivos de esta Fiscalía General, pondría en riesgo la seguridad e integridad de las acciones de combate a la delincuencia, investigación e inteligencia. Por lo anterior que resulta esencial reservar la información relativa a las especificaciones del sistema de geolocalización.

Riesgo identificable. El uso de las tecnologías y sistemas de geolocalizaciones ha sido utilizado como apoyo para el desarrollo de las investigaciones y la acreditación de los hechos delictivos, buscando con esto el castigo del o los responsables, la reparación del daño a las víctimas u ofendidos, obteniendo mejores resultados para abatir la incidencia delictiva.

Sin embargo, esto se vería seriamente afectado si se divulga la información de los programas, herramientas tecnológicas, bases de datos o sistemas tecnológicos con que cuenta la Fiscalía para el perfeccionamiento de la investigación y persecución de delitos si los grupos delictivos tuvieran acceso a las especificaciones técnicas de dichos sistemas, contarían con una clara visión para desarrollar, adquirir o contratar, una contrainteligencia que sea capaz de evadir, bloquear o incluso hackear los sistemas con los que cuenta la Fiscalía General para permanecer impunes y seguir lesionando los derechos de la sociedad.

Por lo anterior, resulta indispensable la reserva de la información contenida en los contratos de referencia.

B. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

El Diccionario de la Real Academia Española, define como riesgo a la contingencia o proximidad de un daño y por real que tiene existencia objetiva, luego entonces, el riesgo de perjuicio lo representa la administración y procuración de justicia, ya que no solamente está prohibido revelar información reservada o confidencial, sino que además existen sanciones y responsabilidades a incurrir por los servidores públicos que hagan mal uso de ella, como sería en el presente caso, ya que revelar la información que hoy se somete a reserva, se estaría ante la presencia de un delito contra la administración de justicia.



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

Sin omitir señalar que la función esta Fiscalía General, entre otras, es la persecución de los delitos y que, de divulgarse la tantas veces referida información, pudiera no cumplirse esta obligación por parte de esta Institución.

Por tanto, se afirma que el perjuicio de difundir la misma supera el interés particular de conocerla, más aún cuando la reserva de la información obedece a un tiempo determinado.

C. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

El acceso a la información pública tiene limitaciones, ya que no toda la información que se encuentre en los archivos de esta Fiscalía General puede ser difundida o entregada. Así ocurre, en el caso de información relacionada con la adquisición de bienes o servicios que aportan a la persecución e investigación de un delito, cuya excepción al acceso a la información debe estar destinada a proteger un objetivo legítimo.

Si bien es cierto que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, también es cierto que el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la norma correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, en el cual resultará clasificada la misma, siempre que exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público por conocer o acceder a la información, tal como acontece en el caso que nos ocupa. En este caso, reservar la información solicitada no se traduce en medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al proteger derechos como lo son la seguridad pública y el acceso a la justicia.

Con base en lo anterior, se acredita que la divulgación de la información lesionaría el interés jurídicamente protegido por la norma, y el daño que pueda producirse con la publicación de la información es mayor que el interés de conocerla.

D. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.

Las causales aplicables del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la clasificación de la información materia de la presente prueba de daño, son las contenidas en las fracciones I, VII y XII, en concordancia con lo establecido en las fracciones I, VI y XI del artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con los numerales Décimo octavo, Vigésimo Sexto y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que prevén que el acceso a la información será reservada cuando comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, obstruya la prevención o persecución de los delitos y/o se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

El artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional prevé que en las investigaciones abiertas se mantenga una reserva de actuaciones, así como el deber del Ministerio Público de mantener sigilo; y el artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo de la norma suprema obliga al Ministerio Público a garantizar la protección de las personas que intervengan en el proceso penal, particularmente la víctima, el ofendido y los testigos. Los derechos previstos en los artículos constitucionales mencionados y los deberes que éstos imponen al Ministerio Público revelan que la tutela de las investigaciones abiertas y la seguridad de las personas son cuestiones de orden público, que justifican la restricción a la información solicitada.

En tal virtud, las fracciones I, VI y XI, del artículo 110, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para Elaboración de Versiones Públicas, establecen que, **podrá considerarse como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, obstruya la prevención o persecución de delitos y/o se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público**, supuestos que se actualizan en el presente asunto, puesto que la información solicitada se refiere a contratos



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

administrativos de prestación de servicios de consultas de geolocalización derivado de procedimientos de adjudicación directa por excepción a la licitación pública con fundamento en el artículo 38 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, mismos que por Ley tienen el carácter de reservada.

Así pues, como se advierte del marco normativo invocado, existen disposiciones legales expresas que determinan la reserva de la información requerida, por lo que, en el caso de entregar la información solicitada, se verían vulneradas las funciones de esta Fiscalía General.

En cuanto al Lineamiento General Décimo octavo, establece lo siguiente:

*Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como **información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, **tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.***

Se pondría en peligro el orden público con la difusión de la información la cual podría entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

*Asimismo, podrá considerarse como reservada **aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública**, sus planes, estrategias, **tecnología**, información, sistemas de comunicaciones.*

Énfasis añadido.

E. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño.

Dar a conocer la información requerida, va a generar que pudieran conocer las características técnicas como nombre, marca y/o modelo de los sistemas de



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

inteligencia que utiliza esta institución, mismos que sirven para la prevención, investigación y persecución de delitos, por lo que divulgar esta información al hacerla pública podría llegar a manos de grupos delictivos, pudiendo tomar medidas que evadan los sistemas por lo tanto previo a la comisión de un delito, conocerían que rutas usar para evadir las técnicas de investigación respectivas.

De la misma manera, dar a conocer las especificaciones contenidas en los multicitados contratos, misma que contiene datos específicos de los sistemas de geolocalizaciones que utiliza la Fiscalía para la prevención, investigación y persecución de delitos, podría prestarse a que esta sea utilizada por grupos delictivos, sirviéndoles no únicamente para que identifiquen tal tecnología, sino también para conocer las limitaciones y así superarla. **(modo)**

Conforme a lo anterior, el daño que se genera al entregar la información solicitada, es presente y futuro, presente por el sistema de tecnología de geolocalización que se utiliza cuantas veces es necesario.

Es importante señalar que el uso de tales herramientas, se lleva a cabo cada que así lo solicita el personal encargado de la investigación de delitos, el uso de los mismos atiende a la urgencia y está estrechamente vinculado a procurar la seguridad y la persecución de delitos. **(tiempo)**

La divulgación de la información pone en riesgo la procuración de justicia en el Estado de Baja California, toda vez que la información solicitada, atiende a sistemas tecnológicos, mediante el cual se facilita la investigación y persecución de actividades ilícitas, a través del uso de tecnología de vanguardia. **(lugar)**

De tal manera, queda de manifiesto que la publicidad de la información implica un riesgo para las acciones de investigación de delitos y la procuración de justicia, así como el riesgo de que terceros no autorizados tengan acceso a la información clasificada, aunado a que, por disposición expresa de Ley, dicha información tiene el carácter de reservada.

Por lo anterior, se enlista a continuación los documentos contractuales que se someten a clasificar como **RESERVADOS**:



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

	AÑO	PROCEDIMIENTO	CONTRATO
1.	2021	FGEBC/OM/ADJ-DIR/027/2021	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2.	2021	FGEBC/OM/ADJ-DIR/035/2021	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
3.	2022	FGEBC/OM/ADJ-DIR/009/22022	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS AL SISTEMA INTELIGENTE DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
4.	2022	FGEBC/FASP/ADJ-DIR/016/2022	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FISCALÍA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
5.	2023	FGEBC/FASP/ADJ-DIR/011/2023	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FISCALÍA DE UNIDADES ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
6.	2023	FGEBC/FASP/ADJ-DIR/012/2023	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA UNIDAD DE COMBATE AL SEQUESTRO DE LA FISCALÍA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
7.	2023	CONVENIO MODIFICATORIO FGEBC/FASP/ADJ-DIR/011/2023	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA FISCALÍA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN Y BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
8.	2023	CONVENIO MODIFICATORIO FGEBC/FASP/ADJ-DIR/012/2023	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA UNIDAD DE COMBATE AL SEQUESTRO DE LA FISCALÍA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
9.	2024	FGEBC/OM/ADJ-DIR/010/2024	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTAS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

Reiterándose que la reserva realizada, está debidamente justificada, y es idónea, necesaria y proporcional para que las funciones desarrolladas por esta Fiscalía General, no se vean afectadas.

IV. Periodo de reserva. En cuanto al plazo que se debe esperar para que la información sea pública se estima pertinente su reserva por el **plazo de cinco años.**

Por lo anteriormente expuesto la Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado, emite el siguiente:



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de
Baja California**

ACUERDO

PRIMERO. Se clasifica como **RESERVADA** la información requerida en la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio **021381024000442**, por un periodo de **cinco años**.

SEGUNDO. Se solicita someter a consideración del Comité de Transparencia la confirmación de clasificación de información como reservada.

ATENTAMENTE

**LIC. BERNARDO MORENO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ACUERDO: FCE/DLA/004/2024



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California**

ACUERDO: FGE/DLA005/2024

ACUERDO

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES, POR EL CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE PARCIALMENTE PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REGISTRADA CON EL NÚMERO DE FOLIO 021381024000442.

GLOSARIO

Comité de Transparencia:	Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Fiscalía General:	Fiscalía General del Estado de Baja California.
Ley de Transparencia:	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Ley General:	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lineamientos Generales:	Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Reglamento de la Ley:	Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Ley Orgánica de la Fiscalía General	Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la solicitud de información. En fecha 29 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado de Baja California recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otras, la solicitud de información registrada con el número de folio **021381024000442**, en la que se solicita lo siguiente:

"Derivado de las funciones del Ministerio Público, Policías y Peritos emanadas de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de su aplicación en todo el territorio mexicano.

B



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

La Fiscalía /Procuraduría, en relación a la Localización Geográfica o Geolocalización a la que se refiere la Ley:

¿Cual es el fundamento jurídico para realizar geolocalizaciones o Localizaciones Geográficas de telefonos?

¿Se necesita siempre autorización judicial para llevarlo a cabo?, en caso de no necesitarse, ¿por que? Favor de fundamentar legalmente

¿Cuál es el fundamento legal para adquirir, rentar o celebrar contratos en materia de geolocalizaciones? ¿Y cual es su objetivo?

¿Cual es la justificación para la adquisición de tecnologías de geolocalización y para la autorización de la adquisición?

¿Quién lleva a cabo las geolocalizaciones o localizaciones geográficas y quien las ordena? ¿Cual es el fundamento para realizar geolocalizaciones o para utilizar software o programas o equipos de geolocalización?

Derivado de sus respuestas, la Fiscalía/Procuraduría a través de su personal (MP, Policías o Peritos) podría ordenar ejecutar o ejecuta Localizaciones geográficas o geolocalizaciones de personas o equipos telefónicos? De ser así cual es el marco jurídico para usarlos.

¿Quién efectúa o ejecuta dichas Localizaciones geográficas o geolocalizaciones? (MP, Policías o Peritos)

Así mismo, tomando en consideración que para cumplir con los objetivos de transparencia, los contratos son Públicos ¿tienen contratos de compra-venta, renta o cualquier otro en el que se haga uso o permita utilizar equipos o softwares para localización geográfica o geolocalización?, favor de remitir del año 2020 a la fecha los que se hayan celebrado, en versión pública.

Favor de remitir un número total de las veces que se han ejecutado localizaciones geográficas o geolocalizaciones derivado de esos contratos." (sic)

2. Turno a la Unidad Administrativa. Se recibió en esta Dirección de Licitaciones y Adquisiciones la boleta numero OM/TR/112/2024, signada por el Mtro. Ricardo Daniel Garduño Barrera, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con la cual se turna la Solicitud de Acceso a la Información Pública **021381024000442**.

3. Respuesta al requerimiento. En fecha 20 de julio de 2024, esta Dirección a mi cargo, mediante oficio, FGEBC/OM/DLA/664/2024, dirigido a la Unidad de Transparencia de esta Fiscalía dió respuesta al requerimiento de información de la siguiente manera:

"...me permito informar que, como es de conocimiento público, mediante Decreto No. 07 emitido por la XXIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 23 de Octubre de 2019, fueron reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para crear la Fiscalía General del Estado de Baja California, mediante la fusión de la antigua Procuraduría General de Justicia y la

B



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública respectivamente; en el mismo sentido, en fecha 31 de octubre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto No. 10 de la XXIII Legislatura del Estado, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de esta Fiscalía General, y cuyo Artículo Séptimo Transitorio establece que se contará con el plazo máximo de un año, contados a partir del 31 de Octubre de 2019, para implementar en su totalidad la transición administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, tiempo durante el cual todos los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, y cualquier tipo de información derivada de dichos procedimientos en donde el área usuaria o requirente fueron las dependencias antes mencionadas, se desarrollaron y tramitaron a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, hasta en tanto se concluía con la transición antes referida, esto es, hasta el día 31 de Octubre de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, remito los documentos contractuales, celebrados en el periodo del 2021 al 2024 que se enlistan a continuación:..." (Sic)

4. Solicitud de confirmación de declaración de incompetencia parcial. En fecha 20 de julio de 2024 esta Dirección de Licitaciones y Adquisiciones, a efecto de dar contestación a la multicitada solicitud de acceso a la información pública, remite al Comité de Transparencia el ACUERDO DE DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA PARCIAL, en razón de ser incompetente para contestar la información peticionada únicamente del periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020; siendo competente solo de la información posterior a la fecha antes aludida, por lo que solicita tenga a bien determinar la confirmación de la declaración de incompetencia parcial procedente.

Con base a las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDO

I. Competencia. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 53 y 54, fracción II de la Ley de Transparencia, es atribución del Comité de Transparencia confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen las Unidades Administrativas que integran la Fiscalía General.

II. Marco normativo. Que para poder determinar qué es una incompetencia, debemos comenzar por establecer que la competencia puede definirse como el

B



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

ámbito, la esfera o el campo dentro del cual una autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones conforme a la normatividad aplicable.

Siguiendo ese orden de ideas, el Pleno del INAI mediante el **criterio 13/17** ha señalado lo siguiente:

***"Incompetencia.** La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." (Sic)*

Ahora bien, la normatividad de la materia establece dos supuestos respecto de la incompetencia:

1) incompetencia parcial.

Al respecto, la Ley de Transparencia dispone en su artículo 129 segundo párrafo la denominada incompetencia parcial en los siguientes términos:

***Artículo 129.-** Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de conocer el sujeto o los sujetos obligados competentes, lo hará saber al solicitante.*

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Lo anterior se refuerza con el **criterio 2/20** emitido por el Pleno del INAI:

***"Declaración de incompetencia por parte del Comité, cuando no sea notoria o manifiesta.** Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario efectuar un*

B



Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California

análisis mayor para determinar la incompetencia, ésta debe ser declarada por el Comité de Transparencia." (Sic)

De este modo podemos resumir el análisis bajo los siguientes puntos:

- A. Una incompetencia es la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho.
- B. Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido deberá efectuarse un análisis para determinar la incompetencia, **la cual deberá ser declarada por el Comité de Transparencia.**

III. Declaratoria de incompetencia: Que de la revisión a la información requerida en la solicitud de acceso a la información que se refiere registrada con el número de folio 0213810224000442, se advierte que el interés del solicitante es conocer:

"...Así mismo, tomando en consideración que para cumplir con los objetivos de transparencia, los contratos son Públicos ¿tienen contratos de compra-venta, renta o cualquier otro en el que se haga uso o permita utilizar equipos o softwares para localización geográfica o geolocalización?, favor de remitir del año 2020 a la fecha los que se hayan celebrado, en versión pública."

Siendo preciso señalar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, mediante Decreto No. 07 emitido por la XXIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California y publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 23 de Octubre de 2019, fueron reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para crear la Fiscalía General del Estado de Baja California, mediante la fusión de la antigua Procuraduría General de Justicia y la entonces denominada Secretaría de Seguridad Pública respectivamente; en el mismo sentido, en fecha 31 de octubre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto No. 10 de la XXIII Legislatura del Estado, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de esta Fiscalía General, y cuyo Artículo Séptimo Transitorio establece que **se contará con el plazo máximo de un año, contados a partir del 31 de Octubre de 2019, para implementar en su totalidad la transición administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, tiempo durante el cual todos los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, y cualquier tipo de información derivada de dichos procedimientos**

B



**Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía
Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California**

en donde el área usuaria o requirente fueron las dependencias antes mencionadas, se desarrollaron y tramitaron a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, hasta en tanto se concluía con la transición antes referida, esto es, hasta el día 31 de Octubre de 2020.

Por lo anterior, cualquier información que se haya generado desde el día 01 de enero de 2020 y hasta el día 31 de octubre de 2020, que se encuentre relacionada con la solicitud de acceso a la información pública número 021381024000442, forma parte de los archivos de quien en su momento los haya tramitado; por lo que, esta Dirección de Licitaciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, es **incompetente parcialmente** para proporcionar alguna información sobre el particular.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la **INCOMPETENCIA PARCIAL** para dar atención a la solicitud de información con folio 021381024000442.

SEGUNDO. Se solicita someter a consideración del Comité de Transparencia la confirmación de declaración de incompetencia parcial de esta Dirección de Licitaciones y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Fiscalía del Estado de Baja California.

Por conducto de la Unidad de Transparencia notifíquese el presente acuerdo de incompetencia a la persona solicitante, a través del sistema respectivo.

ATENTAMENTE

**LIC. BERNARDO MORENO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES DE LA FISCAL
GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**